

Medellín, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	DECLARATIVO RCE
Radicado	05001 31 03 009 2017 00653 01
Demandante	COSTELLO DARÍO CARDONA COLORADO, LUZ MARINA PARRA ISAZA y LEIDY DANIELA CARDONA PARRA
Demandado	OMAR DE JESÚS AGUDELO ÁLZATE, LUZ MARINA AGUDELO ÁLZATE y ARTURO CÁRDENAS ORDOÑEZ
Juzgado Origen	NOVENO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación de la sentencia en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

1.1 DEMANDA¹.

Pretende la actora que se declare la responsabilidad civil extracontractual de Omar de Jesús Agudelo Álzate, Luz Marina Agudelo Álzate y Arturo Cárdenas Ordoñez y, en consecuencia, se les condene solidariamente al pago de indemnización de perjuicios así: i) en favor de Costello Darío Cardona Colorado la suma \$11'000.000 por daño emergente, \$270'627.000 por lucro cesante, 500 SMLMV por perjuicios morales, 50 SMLMV por daño a la vida de relación, 50 SMLMV por merma de capacidad laboral y 50 SMLMV por daño a la salud; ii) en favor de Luz Marina Parra Isaza la suma de 200 SMLMV por daño moral y 50 SMLMV por daño a la vida de relación y; iii) en favor de Leidy Daniela Cardona Parra la suma de 200 SMLMV por daño moral y 50 SMLMV por daño a la vida de relación.

Expuso que el 6 de octubre de 2003, Costello Darío Cardona Colorado, de ocupación mecánico automotriz, se encontraba reparando el vehículo de placas TIJ196, propiedad de Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate, conducido por Arturo Cárdenas Ordoñez, debido a una falla de frenos. Precisó que solicitó a Cárdenas Ordoñez mantener asegurado el rodante mientras realizaba la reparación, sin embargo, este descendió del mismo dejándolo encendido, el cual se puso en marcha, lesionando a Cardona Colorado. En razón de ello, fue trasladado al Hospital General de Medellín donde fue diagnosticado inicialmente con avulsión de tejidos blandos en la pierna izquierda, fractura abierta grado III y shock hemorrágico; días después su pierna izquierda fue amputada.

Indicó que, en razón de las lesiones padecidas, Costello Darío Cardona Colorado fue dictaminado con una pérdida de capacidad laboral del 50.13% por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

¹ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 01 páginas 123 a 135.

Por otro lado, en atención a los hechos relatados, el conductor Arturo Cárdenas Ordoñez fue condenado penalmente el 3 de octubre de 2005 por el delito de lesiones personales culposas, mediante sentencia proferida por el Juzgado Vigésimo Tercero Penal Municipal de Medellín.

A partir de las lesiones sufridas por el demandante, precisa que su calidad de vida ha desmejorado notablemente, puesto que presenta minusvalía permanente, no puede desplazarse, ni realizar esfuerzos físicos, ni desempeñar su oficio como mecánico, circunstancias que han afectado su esfera interna y su relación con su familia y la sociedad, privando además a su familia, conformada por su cónyuge Luz Marina Parra Isaza e hija Leidy Daniela Cardona Parra, de su desarrollo normal, sintiéndose afligidas por las limitaciones de su ser querido.

Así mismo, relata que han incurrido en diferentes erogaciones por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, terapias, medicamentos, prótesis, transporte y expedición de documentos que ascienden a la suma de \$11'000.000.

1.2 CONTESTACIÓN².

La demandada fue notificada a través de curador *ad litem*, quien se pronunció reconociendo el parentesco entre la víctima y su hija Leidy Daniela Cardona Parra y manifestando desconocer los demás hechos de la demanda. No se opuso a las pretensiones y no formuló excepciones de mérito.

1.3 PRIMERA INSTANCIA³.

En audiencia del 17 de noviembre de 2020 el despacho de primer grado profirió sentencia que puso fin a la instancia, en la cual declaró probada oficiosamente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate y la de cosa juzgada frente a las pretensiones incoadas por Costello Darío Cardona Colorado frente a Arturo Cárdenas Ordoñez.

Por otro lado, declaró civilmente responsable a Arturo Cárdenas Ordoñez por el daño causado a Luz Marina Parra Isaza y Leidy Daniela Cardona Parra y lo condenó al pago de los perjuicios morales causados, los cuales estimó en 15 SMLMV para la primera y 5 SMLMV para la hija de Cardona Colorado y; negó las demás pretensiones de la demanda.

² Ibidem páginas 295 a 296.

³ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 17.3. y archivo 17.2.

Consideró la *a quo* que, a partir de la prueba trasladada practicada en el proceso adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, radicado 056153-31-03-001-2006-00147-00, se acreditó la titularidad del rodante de placas TIJ196 en cabeza de Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate con el historial vehicular allí aportado, no obstante, también se probó que estos se habían desprendido de la guarda jurídica del vehículo en razón del contrato de permuta celebrado el 15 de julio de 2002 con Jorge Humberto Cárdenas Ordoñez, razón por la cual, los referidos demandados carecían de legitimación para soportar las pretensiones de la demanda, en tanto no ejercían la guardianía de la actividad peligrosa desplegada con el vehículo con el que se causó el daño.

Por otro lado, respecto de las pretensiones incoadas por Costello Darío Cardona Colorado en contra del conductor Arturo Cárdenas Ordoñez, precisó que estas se encontraban cubiertas por la cosa juzgada en razón de la sentencia penal proferida el 3 de octubre de 2005 por el Juzgado Vigésimo Tercero Penal Municipal de Medellín, en la cual se indicó que los perjuicios de la víctima ascendían a la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales debían ser cancelados por Cárdenas Ordoñez.

Finalmente, se concentró en analizar si en el asunto se cumplen los requisitos axiológicos de la acción de responsabilidad civil extracontractual respecto de las pretensiones incoadas por Luz Marina Parra Isaza y Leidy Daniela Cardona Parra frente a Arturo Cárdenas Ordoñez.

Al respecto, consideró que se encontraban acreditados los presupuestos de la acción promovida, en tanto el hecho, el daño y el nexo de causalidad se encontraban acreditados con las pruebas allegadas al plenario. Así, el hecho correspondió al accidente ocurrido el 6 de octubre de 2003, de conformidad con lo narrado y acreditado con la prueba documental arrimada. El daño se concretó en el perjuicio moral sufrido por Luz Marina Parra Isaza y Leidy Daniela Cardona Parra, respecto de la hija precisó que el daño moral se encontraba cobijado de una presunción de hecho, fijada por la jurisprudencia, en razón del parentesco acreditado con el correspondiente registro civil de nacimiento aportado. Respecto de quien dijo ser la cónyuge, precisó que, si bien no se había allegado registro civil de matrimonio que acreditara el vínculo alegado, se encontraba acreditado que Luz Marina Parra Isaza tenía una relación sentimental con la víctima e inclusive tenían una hija en común, quien por el vínculo alegado sufrió el daño moral reclamado por los lazos sentimentales que los unían.

Respecto del elemento subjetivo, precisó que el presente caso se aplicaba el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas, donde la culpa del causante del daño era presunta y este solo se exoneraba de la obligación indemnizatoria probando una causa extraña, no obstante, afirmó que en el presente caso la negligencia se encontraba acreditada con la aceptación de cargos que realizó Arturo Cárdenas Ordoñez al interior del proceso penal que se le adelantó por esta causa.

En tales términos, consideró configurados los presupuestos de la acción de responsabilidad que se promueve, únicamente frente a Arturo Cárdenas Ordoñez y respecto de Luz Marina Parra Isaza y Leidy Daniela Cardona Parra, condenando sólo al pago de los perjuicios morales en las sumas fijadas y negando la condena respecto de los demás perjuicios solicitados en indemnización.

1.4 TRÁMITE DE LA APELACIÓN.

La sentencia de primera instancia fue proferida en audiencia del 17 de noviembre de 2020 y notificada en estrados, inmediatamente fue apelada por la demandante precisando en la misma audiencia los reparos frente a la decisión.

Considerando el actual estado de emergencia sanitaria, se dio aplicación al artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020⁴, concediéndole al apelante la oportunidad para sustentar el recurso y a la contraparte para la réplica, derecho del cual solamente hizo uso la actora.

2. CONTROL DE LEGALIDAD Y COMPETENCIA DEL SUPERIOR.

En atención a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 42 y en el artículo 132 del Código General del Proceso, se aprecian reunidos los presupuestos procesales para emitir sentencia porque se verificó la demanda en forma y su trámite adecuado, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y acudir al proceso respecto de los extremos del litigio, debiéndose destacar que no se advierten vicios ni irregularidades que configuren nulidad.

3. REPAROS CONCRETOS.

3.1 Reparos demandante.

⁴ Mediante la Ley 2213 de 2022, se implementaron de manera permanente las disposiciones de dicho decreto para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, la ley conserva en el artículo 12 la disposición del artículo 14 del decreto en cuanto al trámite de la apelación de sentencias en materia civil y familia.

Con el propósito de que se revoque parcialmente la decisión de primera instancia, la demandante planteó los siguientes reparos⁵, sustentados en segunda instancia⁶:

Ausencia de cosa juzgada. Indicó que la configuración de la cosa juzgada requiere la identidad de partes, objeto y causa, la que no se presenta en ese caso respecto del proceso penal adelantado contra el conductor involucrado en el accidente, porque el propósito de la causa penal difiere del correspondiente al proceso de responsabilidad civil y que es necesario determinar cuáles fueron los perjuicios reclamados y reconocidos en una y otra para determinar la coincidencia en el objeto y en lo penal se indicaron perjuicios diferentes a los pretendidos ante la justicia civil, como son el perjuicio moral y el de vida de relación.

Falta de reconocimiento de perjuicios. Afirmó que en el proceso se acreditaron, con la prueba testimonial, los perjuicios materiales y el daño a la vida de relación solicitados en favor de Costello Darío Cardona Colorado.

Legitimación en la causa de los propietarios. Precisoó que en el proceso se acreditó documentalmente con un certificado de la Secretaría de Tránsito y Movilidad la propiedad inscrita del vehículo con el que se causó el daño a nombre de los señores Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate, que la enajenación alegada a título de permuta requiere la realización del correspondiente traspaso y como no se acreditó entonces deben concurrir solidariamente.

3.2 Réplica demandada. No se pronunció en su oportunidad.

3.3 Problemas Jurídicos.

Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si:

- a) ¿Operó en el presente caso la cosa juzgada respecto de las pretensiones incoadas por Costello Darío Cardona Colorado en contra de Arturo Cárdenas Ordoñez por la sentencia penal emitida o, en caso contrario, hay lugar al reconocimiento de los perjuicios solicitados?
- b) ¿Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate carecen de legitimación en la causa por pasiva para resistir las pretensiones incoadas por los demandantes en virtud de la permuta del vehículo

⁵ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 17.2 desde el minuto 1:15:50.

⁶ Ver ruta: carpeta 04. / archivo "Recurso- Luz Marina Parra.pdf"

con el que se ocasionó el daño o deben responder solidariamente por los daños ocasionados?

- c) ¿Hay lugar a reconocer los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pedidos en favor de Costello Darío Cardona Colorado?

4. FUNDAMENTO JURÍDICO.

4.1 Cosa juzgada penal.

La eficacia de ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho al debido proceso (que incluye la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, según el artículo 29 de la Constitución) y los derechos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia (según el artículo 229 de la Constitución), requiere que las sentencias resuelvan de manera definitiva los litigios que se presentan. Esto significa que, una vez que las sentencias adquieren firmeza, ningún interesado y mucho menos quien haya sido parte de la decisión adoptada, puede plantear nuevamente el mismo conflicto con la intención de obtener una decisión contraria, ya sea total o parcialmente, a la sentencia inicialmente emitida.

En lo que corresponde a los efectos de la cosa juzgada penal en el proceso civil, la jurisprudencia ha distinguido sus consecuencias según el tipo de decisión que profiere el juez penal.

Tratándose de una decisión absolutoria, ella tiene efectos relativos de cosa juzgada en el proceso civil, por lo que el juez civil debe verificar si los motivos objeto de la absolución penal conllevan necesariamente a una causa exonerativa en el proceso civil⁷.

Tratándose de sentencia condenatoria, el asunto se examina desde dos ópticas o fases.

Por un lado, la decisión condenatoria cuenta con efectos de cosa juzgada en lo que a la responsabilidad civil del condenado corresponde, frente a lo cual, ha dicho la Corte:

"... la sentencia condenatoria de carácter penal tiene valor absoluto de cosa juzgada frente al victimario, por cuanto únicamente podrá ser removida por vía del recurso de revisión o de tutela, empero con la firmeza de la responsabilidad penal, ésta permite activar el reclamo civil al interior de ese juicio, o en uno

⁷ Véase al respecto la sentencia SC665 del 7 de marzo de 2019, rad. 2009-00005-01.

*separado de carácter civil o contencioso administrativo cuando la autoridad penal nada decidió."*⁸

Por otro lado, en lo relacionado con la indemnización de perjuicios, la cosa juzgada penal requiere el cumplimiento de algunos requisitos, por un lado, se requiere que la víctima y los terceros interesados hubieran promovido la acción civil al interior del correspondiente proceso penal, de conformidad con la facultad otorgada por el artículo 43 del Decreto 2700 de 1991 y con los requisitos establecidos en el artículo 46. Al respecto dijo la Corte:

*"... la regla general es que solo una vez alcanzada la fijación procesal en firme de la existencia y de la magnitud del daño causado a la víctima por el hecho punible, resultado del ejercicio de la respectiva acción resarcitoria de naturaleza civil de la cual son titulares dicha víctima o sus sucesores, no debido a la iniciativa oficiosa de los funcionarios en obediencia a los perentorios mandatos contenidos en los Arts. 55, 56, 180 numeral 8º y 334 numeral 6º del Código de Procedimiento Penal, y en la medida en que para ese ejercicio se haya empleado uno cualquiera de los conductos con tal fin indicados en el Art. 43 ibídem, podrá decirse sin rodeos que a aquella no le es permitido renovar su demanda e intentar discutir de nuevo las mencionadas materias en otro proceso civil posterior seguido en contradictorio con quienes fueron declarados responsables del hecho punible, así como tampoco podrá hacerlo, con la misma limitación subjetiva naturalmente, si pese a mediar condena penal, se rechaza la indemnización y por lo tanto es desestimada la acción civil por falta de prueba del perjuicio o su cuantía."*⁹ (subrayas propias)

Bajo tal escenario, tratándose de procesos penales adelantados en vigencia de la Ley 600 de 2000, como el presente, en los que se profiere fallo condenatorio, la acción civil relativa a la indemnización de perjuicios solo puede verse afectada por la cosa juzgada en los eventos en los que la parte afectada haya promovido la correspondiente acción al interior del proceso penal y no en los casos en que el juez penal se pronuncie oficiosamente respecto de los perjuicios en atención al mandato realizado por el inciso primero del artículo 56 de la mencionada ley, que establecía:

"Artículo 56. Sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios. En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación

⁸ CSJ, sentencia SC3062 del 1 de agosto de 2018, rad. 2007-00057-01.

⁹ CSJ, sentencia SC del 15 de abril de 1997, exp. 4422 reiterada en sentencia SC3062 del 1 de agosto de 2018, rad. 2007-00057-01.

y en la sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta punible. Además, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho si a ello hubiere lugar."

Ahora bien, en los eventos en los cuales la parte afectada no se hubiere constituido como parte civil y se condene al procesado, el artículo 59 de la misma ley establecía que la responsabilidad no podría ser discutida en el proceso civil, el cual solo se limitaría a establecer la clase de responsabilidad civil y el monto de los perjuicios.

4.2 Responsabilidad por actividades peligrosas.

A partir del artículo 2341 del Código Civil, nuestra jurisprudencia ha establecido los tres pilares fundamentales de la responsabilidad civil extracontractual: el daño, la culpa y el nexo de causalidad entre ellos¹⁰.

Particularmente, con base en el artículo 2356 del mismo estatuto, se ha construido la teoría de la responsabilidad por actividades peligrosas, en virtud de la cual se obliga a reparar el daño a quien se vale de acciones o instrumentos que multiplican el poder del ser humano, elevando con ello su potencial dañino y alterando la simetría de la simple interacción entre particulares. De tal forma que, a modo de contrapeso, nuestro ordenamiento consagra una presunción, calificando en la misma norma tal conducta dañina como de malicia o negligencia, circunstancia que en últimas se traduce en un beneficio probatorio para el damnificado, pues, para liberarse de la obligación de reparar, se impone al agente la carga de demostrar alguna causa extraña¹¹.

En lo esencial, esta doctrina se ha mantenido por parte la Corte Suprema de Justicia hasta la actualidad¹², eso sí, en medio de profundas discusiones acerca de si la presunción referida corresponde a un régimen de responsabilidad subjetiva (presunción de la culpa) o a un régimen de responsabilidad objetiva (presunción de responsabilidad)¹³. Sin embargo,

¹⁰ Ver sentencia SC4455-2021 que, entre otras, cita y destaca providencia del 17 de septiembre de 1935 en la que la Corte "sostuvo que, «para que pueda decirse que la **culpa** de una persona ha sido efectivamente la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una **conexión necesaria** entre dicha **culpa** y el **perjuicio**»". En el mismo sentido la SC2107-2018 del 12/06/2018: "Esta Corte, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, ha señalado como presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual, denominada también *aquiliana*, "(i) el perjuicio padecido; (ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; y (iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores"".

¹¹ Ver CSJ, sentencia SC4204 de 2021.

¹² Ver sentencias SC665-2019, SC4420-2020, SC2111-2021, SC2905-2021.

¹³ De las sentencias antes citadas, obsérvese como todas fueron recientemente expedidas, pero mientras que la SC665-2019 se fundamenta en el régimen subjetivo avizorando desde entonces la discusión en la aclaración de voto, por su parte las SC4420-2020 y SC2111-2021 sostienen la postura del régimen objetivo y exponen en todo su esplendor la discusión con cuatro aclaraciones de voto que dejan en evidencia la ausencia de unanimidad y, tal vez por ello mismo, la conveniencia de no tocar el asunto en providencias como la SC2905-2021.

en medio del debate¹⁴ se han conservado los referidos presupuestos axiológicos de la acción de responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas¹⁵.

4.3 Legitimación en la causa del guardián de la actividad peligrosa.

Toda vez que el ejercicio de actividades peligrosas se sirve, la mayoría de las veces, de bienes inanimados¹⁶ que generan un riesgo potencial para terceros, la responsabilidad por los daños que se ocasionen recae en el denominado guardián de la actividad peligrosa que se ejerce con la cosa inanimada. Al respecto, se ha considerado como guardián a *"quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes"*¹⁷, ostentando dicha posición quien tenga la detentación, directa o indirecta, del bien utilizado. Tal guardianía puede ser ejercida por su propietario, empresario, tenedor, poseedor e, inclusive, los detentadores ilegítimos y viciosos, también denominados usurpadores, en tanto que asumieron de hecho el poder autónomo de mando, obstaculizando el de los legítimos titulares.

En materia de guarda, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido sus diferentes orígenes:

"5.- Sobre la cuestión de quién debe responder por el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la de conducir vehículos automotores, se han expuesto diferentes tesis como son la del aprovechamiento económico, la de la guarda jurídica y la de la guarda material.

La Sala, en línea de principio, ha tomado partido por la última, como quedó plasmado en sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414-01, cuando señala que "en los casos de responsabilidad extracontractual o aquiliana, le compete al demandante acreditar los presupuestos de su pretensión, y si como fuente de aquella existe una actividad de las denominadas

¹⁴ El régimen de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa puede apreciarse en las sentencias hito del 14 de marzo de 1938 y 31 de mayo de 1938, hasta las más recientes SC5686-2018, SC665-2019 y SC4204-2021. Por su parte, la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva basada en la presunción de responsabilidad se expone en las sentencias SC3862-2019, SC4420-2020 y SC2111-2021.

¹⁵ Sentencia SC2905-2021 del 29/07/2021 "En tal eventualidad y con el fin de establecer la responsabilidad deprecada, a la víctima le basta acreditar el ejercicio de la actividad peligrosa desarrollada por su contendiente, el daño que padeció y la relación de causalidad entre aquella y este; al paso que el demandado sólo puede exonerarse demostrando que el perjuicio no fue producido por dicha operación, es decir, que obedeció al devenir de un elemento extraño y exclusivo, como la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la víctima o la de un tercero, únicas circunstancias que rompen el nexo causal citado.

Es desacertado, entonces, enfocar la defensa alegando la ausencia de culpa de los enjuiciados, toda vez que estos sólo pueden exonerarse de responsabilidad rompiendo la causalidad."

¹⁶ Tal es el caso de los artículos 2350, 2351, 2355 y 2356 Código Civil en la que se establece la obligación de reparación en los daños causados por objetos inanimados

¹⁷ CSJ, sentencia SC del 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-01.

peligrosas, éste se releva de acreditar la incuria o imprudencia de quien aspira obtener el resarcimiento, pues en desarrollo del artículo 2356 del Código Civil, le resulta suficiente demostrar, a más del responsable del menoscabo, el acaecimiento del daño y que el mismo se produjo en desarrollo de una actuación de tales características (...) A este respecto, la Corte ha precisado que 'El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. ... O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúme tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada (...)' (sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-0)".

La tesis del guardián de la cosa así expuesta y acogida en Colombia, descarta, por lo demás, dos ideas, "la primera es que el responsable del perjuicio causado sea necesaria y exclusivamente el mero detentador físico de la cosa empleada para desplegar la actividad riesgosa [y] la segunda...es que la responsabilidad en estudio tenga que estar ligada, de alguna forma, a la titularidad de un derecho sobre la cosa" (Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de junio de 1992, exp. 3382)"¹⁸.

Así, la doctrina de la Corte ha acogido el criterio de la guarda material como determinante para atribuir responsabilidad por el uso de cosas inanimadas en actividades calificadas como peligrosas; con lo cual, el criterio que determina dicha calidad de guardián se dirige a quien se le pueda atribuir autoridad o poder de uso, mando, control o aprovechamiento respecto de la cosa inanimada en la que se ejerce la actividad.

Respecto de los titulares inscritos del derecho de dominio, pesa sobre ellos una presunción de guardianía, en tanto se presupone su potestad de dirección, mando y control sobre la actividad desplegada con el bien de su propiedad. Al respecto ha dicho la Corte que *"la responsabilidad del dueño*

¹⁸ CSJ, Sentencia SC de 25 de noviembre de 2013, exp. SC4428-2014, radicación n° 11001-31-03-026-2009-00743-01, reiterando lo dicho en sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414-01.

por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener"¹⁹.

En tal panorama, como el criterio determinante es el gobierno, administración, dirección o control efectivo de la actividad, la propiedad inscrita no impone sin más la declaratoria de responsabilidad del titular, en tanto solo comporta una presunción de guardiana, la cual admite prueba en contrario, siempre que acredite con suficiencia que se desprendió de la potestad de dirección, mando y control. Al respecto dijo la Corte:

*"la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada."*²⁰

5. CASO CONCRETO.

En el asunto bajo estudio no hay discusión en cuanto a la demostración de los presupuestos axiológicos de la acción instaurada, esto es: i) el daño, consistente en las lesiones padecidas por Costello Darío Cardona Colorado el 6 de octubre de 2003; ii) la actividad peligrosa, consistente en la conducción del vehículo de placas TIJ196 por parte de Arturo Cárdenas Ordoñez y; iii) el nexo de causalidad, consistente en que las lesiones acontecieron mientras la víctima realizaba reparación mecánica al mencionado vehículo y el conductor se encontraba al mando del mismo en el momento en que se produjo.

Lo que corresponde establecer a la Sala es si los demandados se encuentran llamados a responder por los perjuicios causados a Costello Darío Cardona Colorado. Por un lado, determinando la legitimación en la causa por pasiva de Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate y, por el otro, verificando el acaecimiento de la cosa juzgada respecto de Arturo Cárdenas Ordoñez.

5.1 Efectos de la cosa juzgada penal condenatoria.

En el presente caso, la *a quo* declaró la existencia de la cosa juzgada respecto de las pretensiones incoadas por Costello Darío Cardona Colorado en contra de Arturo Cárdenas Ordoñez, en virtud de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2005 por el Juzgado Veintitrés Penal

¹⁹ CSJ, sentencia SC de 17 de mayo de 2011, rad. 2005-00345-01, reiterada en sentencias SC de 19 de mayo de 2011, rad. 2006-00273-01, SC de 3 de noviembre de 2011, rad. 2000-00001-01 y SC 4428 de 8 de abril de 2014, rad. 2009-00743-01.

²⁰ CSJ, sentencia SC del 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-01.

Municipal de Medellín, en la cual se declaró penalmente responsable a Arturo Cárdenas Ordoñez por los hechos motivo de la presente acción y se le condenó al pago de 30 SMLMV por concepto de "*perjuicios ocasionados con la infracción*"²¹.

Debe precisarse que, en lo atinente a la responsabilidad penal de Arturo Cárdenas Ordoñez por los hechos que aquí se debaten, tal decisión se encuentra cobijada por la cosa juzgada penal condenatoria, en los términos descritos en la parte motiva y por lo dispuesto en el entonces vigente artículo 59 de la Ley 600 de 2000, de tal forma que su responsabilidad no es motivo de discusión en el proceso civil, el cual se limita a determinar su clase y el monto de los perjuicios. En el mismo sentido, si en gracia de discusión existieran inquietudes acerca de una eventual incidencia causal de la víctima en la realización del daño (art. 2357 Código Civil), lo cierto es que ese asunto también fue expresamente analizado por el juez penal, quien consideró:

*"... la causa fundamental y determinante del accidente lo fue exclusivamente la imprudencia del conductor... así se sostenga por parte del encartado, que tomó todas las precauciones, antes de proceder a encender su vehículo el día de los hechos, indicando adicionalmente, que más bien fue culpa del señor Costello Darío, quien no tomó las medidas de seguridad necesarias para realizar el trabajo encomendado, no obran elementos de juicio que respalden sus dichos y su posición defensiva..."*²²

Este extracto respalda lo afirmado porque la sentencia penal vinculante abordó específicamente el asunto de la intervención de la víctima directa y descartó su participación en el daño, por lo que no hay lugar a analizar en esta sede una eventual concausalidad.

Ahora bien, si bien en la mencionada providencia se condenó a Arturo Cárdenas Ordoñez a pagar a Costello Darío Cardona Colorado los perjuicios estimados, esta se produjo en virtud del mandato oficioso de que trata en mencionado artículo 56, precisando que aunque se le indicó al juez penal que "*se iba a presentar la demanda*" a través de la acción civil, no obraba prueba al respecto.

En tales términos, no es posible predicar la cosa juzgada en el presente caso, por cuanto, ni Costello Darío Cardona Colorado ni los demás demandantes se hicieron parte civil en el proceso penal y la condena impuesta no implicó la resolución de la acción civil, en tanto, esta nunca se

²¹ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 01 páginas 96 a 105.

²² Ver ruta: carpeta 01 / archivo 01 páginas 331 y 333.

solicitó, ni se promovió. Además, no se fijó de manera definitiva la existencia ni la magnitud del daño sufrido por la víctima debido al delito cometido, como resultado del ejercicio de la correspondiente demanda civil de reparación, únicamente, se condenó y determinó en el monto en razón del mandato legal referido, más no como una definición de la acción civil.

Se insiste, en el proceso no se acreditó que la demandante se hubiera hecho parte civil en el proceso penal correspondiente, razón por la cual, la condena proferida por el juez de conocimiento no puede producir los efectos de cosa juzgada en el proceso civil que aquí se decide, en tanto el litigio correspondiente a la clase de responsabilidad y el monto de los perjuicios no fue ventilado por la demandante ante el mencionado despacho. Por lo cual, el cargo de la demandante prospera respecto de la acción promovida en contra de Arturo Cárdenas Ordoñez por la demandante.

5.2 El guardián de la actividad peligrosa.

Inicialmente, debe decirse que obra histórico de propietarios del vehículo de placas TIJ196²³, incorporado como prueba trasladada, en el que se acredita que Omar Agudelo Alzate fue copropietario inscrito del vehículo entre el 24 de febrero de 1994 y el 28 de octubre de 2003²⁴, así mismo, Luz Marina Agudelo Alzate fue copropietaria inscrita del vehículo entre el 2 de marzo de 2001 y el 28 de octubre de 2003²⁵, con lo que se presume de ellos la dirección, mando y control de la cosa inanimada causante del daño que se reclama para el 6 de octubre de 2003, fecha de los hechos y; por ende, les competía acreditar con suficiencia que para tal fecha se habían desprendido del poder intelectual de control y dirección del vehículo de forma total y definitiva.

La tradición del dominio requiere, en los términos del primer inciso del artículo 47 del Código Nacional de Tránsito Terrestre:

"Artículo 47. TRADICIÓN DEL DOMINIO. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo."

²³ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 03.2. páginas 22 a 25.

²⁴ Fecha de expedición.

²⁵ Fecha de expedición.

Por lo cual, para enervar la presunción de guardianía en cabeza del titular inscrito del derecho de domino sobre el vehículo, debe existir prueba suficiente del desprendimiento del poder intelectual de control y mando sobre la actividad y la cosa con la cual se causa el daño; así mismo, si lo que se alega es haber traidado el bien, se requiere adicionalmente el cumplimiento del procedimiento antes descrito para materializar la transferencia del dominio.

En el presente asunto, la *a quo* encontró probada la falta de legitimación en la causa de Omar Agudelo Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate, derivada de la presunta transferencia del derecho de dominio que estos hicieron a Jorge Humberto Cárdenas Ordoñez, mediante contrato de permuta fechado del 15 de julio de 2002²⁶.

Ahora bien, respecto de la valoración probatoria del documento en mención, debe considerarse lo preceptuado en el artículo 253 del CGP:

"Artículo 253. Fecha cierta. La fecha cierta del documento público es la que aparece en su texto. La del documento privado se cuenta respecto de terceros desde que haya ocurrido un hecho que le permita al juez tener certeza de su existencia, como su inscripción en un registro público, su aportación a un proceso o el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado." (subrayas propias)

En tal sentido, la fecha cierta del contrato de permuta aportado, no podría ser anterior al 15 de septiembre de 2006 fecha en que fue aportado al proceso tramitado ante la agencia judicial de Rionegro. Lo anterior, por cuanto el documento carece de otro indicativo que permita tener certeza de su existencia con anterioridad a dicho momento, lo que de entrada descartaría el desprendimiento del derecho de dominio para el momento de los hechos.

Adicionalmente, de un análisis del documento aportado se advierten condiciones e inconsistencias que permiten considerar no probado el desprendimiento del poder intelectual de control y mando por parte de Omar Agudelo Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate sobre el vehículo de placas TIJ196 y de la actividad que con este se desplegaba. Así:

- a) En el documento se indicó que era deber de Jorge Humberto Cárdenas Ordoñez entregar el vehículo a permutar de placas VX0216 "*radicado en el municipio de La Ceja (Antioquia)*", respecto de lo cual no obra prueba.

²⁶ Ibidem páginas 107 a 108.

- b) Al momento de identificar el vehículo a permutar por Omar Agudelo Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate, se indica que su placa es "DIJ196", no obstante, el involucrado en los hechos objeto de la presente acción es el de placas TIJ196.
- c) El pago de la suma pactada en dinero, se encontraba supeditada a que se hiciera *"entrega de los papeles al día"*, de lo cual no obra prueba en el expediente.
- d) En la cláusula tercera del mencionado contrato, las partes se obligaron *"a realizar las gestiones de traspaso a más tardar dentro de los quince días siguientes a la firma del presente contrato"*, no obstante, para el 28 de octubre de 2003, fecha en que se expidió el certificado aportado, había transcurrido más de un año desde la fecha de la presunta firma del contrato sin que se hubiera cumplido con el mencionado traspaso.

A partir de lo anterior, tanto la fecha cierta posterior a los hechos, como la deficiencia en la identificación del vehículo y el incumplimiento de las obligaciones contractuales para el cambio de titularidad del bien, permiten concluir que, para el momento de los hechos Omar Agudelo Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate sí tenían el poder intelectual sobre la actividad peligrosa ejercida con el vehículo de placas TIJ196, estableciéndose a su cargo facultades de gobierno, administración, dirección y control efectivo de la actividad.

Nótese que no se requiere que se tenga físicamente la cosa para ser guardián de ella, en tanto, lo fundamental es que se posea el poder de mando en relación con ella, lo que supone un poder intelectual de control y dirección de la misma, poder de mando que se presume de conformidad con la doctrina vigente y que no fue desvirtuado por los demandados en el presente trámite.

En tal panorama, se advierte el ejercicio de guardianía del vehículo por parte de los demandados Omar Agudelo Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate, la cual, permite la atribución de responsabilidad que se les hizo. En tal sentido el cargo de la demandante prospera.

5.3 Cosa juzgada derivada de la terminación del proceso civil previo.

En el presente caso, la Sala entrará al análisis de la cosa juzgada respecto del contrato de transacción celebrado al interior del proceso civil previo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, según el cual el juez de segunda instancia es competente para pronunciarse respecto de los asuntos íntimamente relacionados con el derecho en disputa, facultad respecto de la cual, ha dicho la Corte:

*"... se tiene que, como regla de principio, la decisión del superior está restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre temáticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar íntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento"*²⁷

Al respecto, se advierte que, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, Costello Darío Cardona Colorado y Luz Marina Aparra Zapata, actuando en causa propia y en representación de la menor Leidy Daniela Cardona Parra, así como Luz Idalia, Johana María y Marcela Dalila Castañeda Parra promovieron demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de Omar de Jesús Agudelo Álzate, Luz Marina Agudelo Álzate, y Flota Rionegro S.A., a la cual se le asignó el radicado 056153-31-03-001-2006-00147-00 y fue admitida mediante providencia del 2 de agosto de 2006²⁸.

La demanda tenía por objeto la declaratoria de responsabilidad civil de la demandada y la condena al resarcimiento de los perjuicios sufridos, relativos al lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la vida de relación y daño fisiológico sufridos por Costello Darío Cardona Colorado, además de los perjuicios morales sufridos por los demás demandantes²⁹.

Así mismo, tenía como *causa pretendi* los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2003, en los que Costello Darío Cardona Colorado le fue amputada su pierna izquierda en razón de avulsión, fractura y shock hemorrágico producidos por el vehículo de placas TIJ196 conducido por Arturo Cárdenas Ordoñez y de propiedad de Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate, mientras la víctima lo reparaba por una falla de frenos.

Posteriormente, en audiencia del 30 de noviembre de 2006 ³⁰, se desvinculó del trámite a Flota Rionegro S.A., la demandante dijo retirar las pretensiones de Luz Marina Parra Zapata, Leidy Daniela Cardona Parra, Luz Idalia, Johana María y Marcela Dalila Castañeda Parra y se ordenó vincular al trámite a Jorge Humberto Cárdenas Ordoñez y Turicar Ltda.

A continuación, mediante escrito del 18 de junio de 2009³¹, Costello Darío Cardona Colorado y los demandados Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate solicitaron la terminación del proceso por

²⁷ CSJ, sentencia SC3918 del 8 de septiembre de 2021, rad. 2008-00106-01.

²⁸ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 03.2. página 47.

²⁹ Ibidem páginas 5 a 13.

³⁰ Ib. página 185.

³¹ Ib. páginas 191 a 194.

transacción, en el cual, la demandada cancelaría a la demandante la suma de \$3'500.000 *"con la finalidad de cancelar las pretensiones invocadas en la demanda y dar por terminado el proceso"*. Por lo cual, el juzgado de conocimiento declaró la terminación parcial del proceso por transacción mediante auto del 19 de junio de 2009³², continuando la misma en contra de los vinculados Jorge Humberto Cárdenas Ordoñez y Turicar Ltda.

Finalmente, mediante auto del 9 de marzo de 2020³³, el proceso fue terminado por desistimiento tácito respecto de los demás vinculados.

Así las cosas, advierte la Sala que se cumplen los presupuestos para la declaración de la cosa juzgada en el presente asunto, en tanto, existe identidad de partes puesto que Costello Darío Cardona Colorado fungió como demandante y Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate como demandados, en el proceso adelantado ante la agencia judicial de Rionegro.

Igualmente, se cumple con la identidad de objeto y causa, en tanto, las mismas pretensiones relativas a la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos por el mencionado demandante, son los que se ventilan en el presente proceso, los cuales comparten causa de pedir, derivada de los hechos ya detallados, relativos al accidente del 6 de octubre de 2003.

Finalmente, en lo que a la definición del litigio primigenio corresponde, se observa que, el proceso terminó por transacción de las pretensiones, decretada en auto del 19 de junio de 2009 respecto del demandante Costello Darío Cardona Colorado y los demandados Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate. En tales términos, acaecido el fenómeno de la cosa juzgada en el presente asunto, se declarará lo pertinente en la sentencia que decide el correspondiente litigio.

Finalmente, aunque el apoderado de la demandante dijo en audiencia del 30 de noviembre de 2006 que *retira* las pretensiones respecto de los demás demandantes, ello no podría haberse considerado como un desistimiento de la demanda, en tanto, de conformidad con el numeral 3 del artículo 343 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil, el apoderado requería facultad expresa para desistir, con la cual no contaba de conformidad con el poder aportado³⁴.

5.4 Conclusiones.

³² Ib. página 195.

³³ Ib. página 197.

³⁴ Ib. página 1 a 3.

De conformidad con lo expuesto, en el presente caso no operó la cosa juzgada penal derivada de la sentencia condenatoria proferida el 3 de octubre de 2005 por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Medellín, en tanto la condena pecuniaria allí impuesta correspondió a la iniciativa oficiosa establecida por el entonces vigente artículo 56 de la Ley 600 de 2000, razón por la cual, la pretensión en materia civil relativa a la indemnización del daño producido no puede entenderse resuelta, atendiendo al hecho que la parte demandante no se hizo parte civil en el mencionado proceso, tal como lo indicó el juez penal en su sentencia.

En tales términos se revocará la sentencia de primera instancia en lo que a la declaratoria de la cosa juzgada penal se refiere.

Por otro lado, en el proceso se acreditó que Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate ostentaban la calidad de propietarios inscritos del vehículo de placas TIJ196 con el cual se causó el daño reclamado, estableciéndose una presunción de guardianía de la actividad peligrosa a su cargo, la cual no fue desvirtuada con el contrato de permuta allegado, en razón a que no existe un hecho que permita tener certeza de su existencia con antelación al 15 de septiembre de 2006, por lo que, se encuentran llamados a responder por los hechos acaecidos el 6 de octubre de 2003.

En tales términos se revocará la sentencia de primera instancia en lo que a la declaratoria de la falta de legitimación en la causa por pasiva se refiere.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo al mandato establecido en el inciso primero del artículo 328 del CGP, se declarará la cosa juzgada respecto de Costello Darío Cardona Colorado como demandante y Omar de Jesús Agudelo Álzate y Luz Marina Agudelo Álzate como demandados, en atención a la transacción celebrada ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, en el proceso radicado 056153-31-03-001-2006-00147-00, en tanto comparte identidad de partes, causa y objeto con el presente.

En tal panorama, procederá la Sala con la liquidación de los perjuicios en favor de Costello Darío Cardona Colorado y en contra de Arturo Cárdenas Ordoñez.

5.5 La condena en perjuicios:

5.5.1 Extrapatrimoniales.

a) Daño moral

Con relación a los perjuicios morales de la víctima directa, motivo de la alzada, debe tenerse en cuenta que, jurisprudencialmente se ha considerado que corresponde a un deterioro o menoscabo del ámbito sentimental y afectivo de la persona, precisando que:

*"... corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos"*³⁵

Ahora bien, con relación a la prueba de su existencia, el juez puede apoyarse en *"hechos notorios, los que -se resalta- deben examinarse en cada caso concreto por el funcionario judicial con miras a evitar su uso desbordado e injusto"*³⁶.

Por otro lado, en lo relativo a la cuantificación de este daño extrapatrimonial ha dicho la jurisprudencia que este se somete al prudente arbitrio judicial³⁷; no obstante, es precedente de esta Sala de decisión analizando la doctrina de la Sala de Casación Civil que el tope máximo de condena son 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales, para los casos en los que se califique el agravio subjetivo como de grado sumo o máximo, verbigracia la muerte de un familiar cercano³⁸.

Ahora bien, en el presente caso para establecer el monto de dicho perjuicio, la Sala tiene en cuenta que, las lesiones sufridas por Costello Darío Cardona Colorado son graves, en tanto perdió su pierna izquierda con ocasión del accidente sufrido, lo cual cambió radicalmente su forma de vida, nótese que el señor Cardona Colorado perdió el 50,13%³⁹ de su capacidad laboral, produciéndosele un estado de invalidez, lo cual, a partir de las reglas de la experiencia y la sana crítica permite inferir que sufrió una afectación emocional alta, que causó aflicción y pesadumbre, además de la perturbación anímica e impotencia de haber perdido su pierna izquierda de un momento a otro.

En tales términos, atendiendo a las lesiones padecidas por el demandante que lo llevaron al estado de invalidez descrito y considerada la afectación moral en un grado alto, atendiendo a los parámetros jurisprudenciales

³⁵ CSJ, sentencia SC del 18 de septiembre de 2009, rad. 2005-00406.

³⁶ CSJ, sentencia SC4803 del 12 de diciembre de 2019, rad. 2009-00114-01.

³⁷ Véase, entre otras, sentencia SC4703 del 22 de octubre de 2021, rad. 2001-01048-01.

³⁸ Véase sentencia TSM SC del 26 de octubre de 2022, rad. 022-2019-00161-01 MP. Sergio Raúl Cardoso González y sentencia TSM SC del 10 de noviembre de 2022, rad. 018-2021-00062-01 MP. José Omar Bohórquez Vidueñas.

³⁹ Ver ruta: carpeta 01 / archivo 01 páginas 90 a 95.

descritos, la Sala fija la indemnización por perjuicios morales en sesenta (60) SMLMV.

b) Daño a la vida de relación

Respecto del perjuicio reclamado por concepto de alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida de relación, también conocido como daño a la salud, ha dicho la Corte que:

*"Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida en condiciones normales"*⁴⁰

Así mismo, ha sido definido por la Corte como:

*"la afectación emocional que, como consecuencia del daño sufrido en el cuerpo o en la salud, o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, causados la víctima directa o a terceras personas allegadas a la misma, genera la pérdida de acciones que hacen más agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, lúdicas, recreativas, deportivas, entre otras."*⁴¹

Así pues, el reconocimiento de dicho daño requiere probar en primer lugar una afectación psicofísica de salud, intangibles de la personalidad (buen nombre, dignidad) o derechos fundamentales y; en segundo lugar, una exteriorización de dicha afectación en la existencia humana.

En el presente asunto se encuentra probada la afectación a la salud de la víctima, la cual le generó una pérdida de capacidad laboral del 50,13%; igualmente se encuentra probada la exteriorización de ese daño, ello haciendo un recuento de la declaración del mismo demandante, quien indicó en su declaración⁴² que se desempeñó actividad laboral como mecánico hasta el año 2003 cuando sufrió el accidente y que a la fecha no tiene ningún oficio ni desempeña ninguna actividad, así mismo, manifestó que no puede realizar ninguna actividad deportiva. Mismas afectaciones que son relatadas por la compañera sentimental Luz Marina Parra Isaza⁴³, por María Nelly Parra de Quinchía⁴⁴ y por Marleny del Socorro Alzate Alzate⁴⁵.

⁴⁰ Sentencia SC562 del 27 de febrero de 2020, rad. 2012-00279-01

⁴¹ Sentencia SC3919 del 8 de septiembre de 2021, rad. 2012-00247-01.

⁴² Ver ruta: carpeta 01 / carpeta 02 / archivo "2017-0065320200225092715.wmw" desde minuto 8:46.

⁴³ Ibidem desde minuto 38:43.

⁴⁴ Ib. desde minuto 59:04.

⁴⁵ Ib. desde minuto 1:04:02.

Adicionalmente, las reglas de la experiencia permiten concluir que, la amputación de la pierna izquierda y la pérdida del 50,13% de la capacidad laboral de un individuo producen una afectación notoria y evidente en sus condiciones de vida, es claro que actividades básicas como caminar, trotar o correr se ven afectadas en alto grado, al igual que la actividad física y la relación con el entorno no es la misma, en tanto la apariencia física es diferente, la cual se exterioriza a cualquier entorno social en el que se desenvuelva el señor Costello Darío Cardona Colorado.

En los anteriores términos, encuentra la Sala que el daño a la vida de relación frente a la víctima se acreditó con suficiencia en el presente asunto y, atendiendo al arbitrio judicial y los topes concedidos por la jurisprudencia de la Corte⁴⁶, se fijará la indemnización en la suma de sesenta (60) SMLMV.

c) Otros daños extrapatrimoniales

Finalmente, respecto de los demás daños extrapatrimoniales solicitados, que la demandante denomina "*perjuicios por la merma de capacidad laboral*" y "*perjuicios por daño a la salud*", debe advertirse que la fundamentación fáctica de los mismos corresponden a la alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida de relación antes estudiado, en tanto, se dice que los mencionados daños se reclaman en razón a que la vida de Costello Darío Cardona Colorado no volvió a ser la misma después del accidente, se relata la afectación que tuvo en la relación con su entorno, que cuenta con problemas para concentrarse y tomar decisiones, así como afectación psicológica por la pérdida de su extremidad.

En tales términos, comprendiéndose los mencionados daños en la órbita de la alteración de las condiciones de existencia, la indemnización antes referida entiende indemnizados los demás daños extrapatrimoniales reclamados.

5.5.2 Patrimoniales.

a) Daño emergente.

La demandante solicita una indemnización de \$11'000.000 por "*gastos médicos, quirúrgicos, terapias, medicamentos, prótesis, transporte, expedición de documentos*".

Frente al daño emergente como modalidad de daño patrimonial, ha dicho la Corte que corresponde a "*la idea de disminución o detrimento, por salida*

⁴⁶ Al respecto véase las sentencias SC5686-2018; SC665-2019; SC562-2020 y SC780-2020, entre otras.

*o egreso pasado, presente o futuro de derechos patrimoniales"*⁴⁷, precisando que el quebranto, lesión o menoscabo del derecho patrimonial *"debe recibirse como una situación veraz, dispuesta a su verificación física, material u objetiva"*.

Lo anterior, por cuanto un daño será susceptible de ser reparado siempre que sea *"‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o hipotético’, esto es, que se presente como consecuencia de la ‘culpa’ y que aparezca ‘real y efectivamente causado’ (Sentencias de 26 de enero de 1967 (CXIX, 11-16) y 10 de mayo de 1997, entre otras)"*⁴⁸.

Bajo tal panorama, a quien alega la existencia del daño le incumbe probar tanto su existencia como su cuantía, en virtud de la carga de la prueba de que trata el artículo 167 del CGP.

En el presente caso, se destaca la inexistencia total de prueba que acredite los mencionados gastos médicos, transporte y de expedición de documentos en los que presuntamente incurrió Costello Darío Cardona Colorado, no se aporta una sola factura que permita concluir que el demandante sufragó gasto alguno de los manifestados. De hecho, el mismo Costello Darío Cardona Colorado declaró que los servicios médicos derivados del accidente le fueron prestados por el SISBEN⁴⁹.

En tales términos, en ausencia de prueba de la existencia y cuantía del daño patrimonial peticionado, se negará el mismo.

b) Lucro cesante.

Se solicita lucro cesante a favor del señor Costello Darío Cardona Colorado, con base en 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha del accidente, teniendo en cuenta que se desempeñaba como mecánico, lo que presume que devengaba la cuantía referida, al cual se le deben aplicar los conceptos jurisprudenciales de prestaciones sociales y gastos personales. Por lo anterior, se solicita por lucro cesante la suma de \$270'627.000.

El lucro cesante corresponde a la utilidad, ganancia o beneficio que el perjudicado ha dejado de obtener, esto es, el incremento patrimonial que con bastante probabilidad habría recibido de no haberse presentado la conducta dañosa.

⁴⁷ CSJ sentencia SC4843 del 2 de noviembre de 2021, rad. 2015-00078-01.

⁴⁸ CSJ sentencia SC de 27 de marzo de 2003, exp. C-6879 reiterada en sentencia SC4843 del 2 de noviembre de 2021, rad. 2015-00078-01.

⁴⁹ Ver ruta: carpeta 01 / carpeta 02 / archivo "2017-0065320200225092715.wmw" desde minuto 22:01.

Con relación a la actualización de la renta para liquidar el lucro cesante consolidado, en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil⁵⁰, se ha establecido "*... que para actualizar el salario devengado por el obitado, debió aplicarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y no el incremento porcentual señalado para el salario mínimo legal, utilizando para tal efecto la fórmula contenida en el criterio de autoridad en cita...*".

En este orden de ideas, al demostrarse en el plenario, que la víctima ejercía actividades laborales para su sustento, de acuerdo a precedentes jurisprudenciales, se acude a la presunción que el mismo devengaba el salario mínimo y como quiera que está acreditada la responsabilidad de la parte demandada, se procederá a efectuar la liquidación del lucro cesante consolidado, desde la fecha de acaecimiento del hecho (accidente), 6 de octubre de 2003, hasta la fecha de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del CGP el cual establece "*...el juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado*".

Lucro cesante desde el 6 de octubre de 2003 a la fecha de esta sentencia. Para el 6 de octubre de 2003 fue certificada una incapacidad laboral de 50,13%, por tal motivo, al ser la misma superior al 50%, se debe indemnizar como si fuera por un 100%, tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley 100 de 1993⁵¹ y de conformidad con lo dicho por la jurisprudencia⁵², lo que indica que el salario base de liquidación es el equivalente al mínimo mensual vigente para el año 2003, esto es, \$332.000, suma que debe actualizarse aplicando el IPC, tal como se dijo con anterioridad.

Así entonces, la liquidación del lucro cesante consolidado para el término indicado y con la fórmula aplicada por la Corte Suprema de Justicia⁵³, se detalla a continuación:

Cálculo Lucro Cesante Consolidado.

Datos preliminares:

Salario mínimo a 2003: \$332.000

⁵⁰ CSJ sentencia SC, 20 nov. 2013, Rad. 2002-01011 y CSJ SC, 9 jul. 2012, Rad. 2002-00101.

⁵¹ "*Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral*".

⁵² Al respecto véase CSJ, sentencia SC2498 del 3 de julio de 2018, rad. 2006-00272-01.

⁵³ Frente a la fórmula de indexación y liquidación del lucro cesante véase las sentencias CSJ SC4322 del 17 de noviembre de 2020, rad. 2006-00514-01; SC512 del 5 de marzo de 2018, rad. 2005-00156-01; SC15996 del 29 de noviembre de 2016, rad. 2005-00488-01; SC5885 del 6 de marzo de 2016, rad. 2004-00032-01.

Actualización de renta:

VA: $VH * IPC\ FINAL / IPC\ INICIAL$

VA: Valor actual

VH: Valor histórico

IPC FINAL: 130,40 a fecha de esta sentencia: febrero⁵⁴ 2023

IPC INICIAL: 52,56 a fecha del accidente: octubre 2003

VA: \$823.683

Lucro Cesante Consolidado:

$$LCC: Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Donde:

Ra: renta actualizada: \$823.683

i: Interés puro corriente: 0.004867

n: Meses a liquidar: 233 (octubre 2003 a marzo 2023)

$$LCC: \$355.326.122$$

Así las cosas, el lucro cesante consolidado a favor del demandante Costello Darío Cardona Colorado, corresponde a la suma de **Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Veintiséis Mil Ciento Veintidós Pesos M/L (\$355.326.122)**

Cálculo Lucro Cesante Futuro

Para el lucro cesante futuro, se efectuará la liquidación, desde la fecha de esta sentencia (fecha de reconocimiento final del lucro cesante consolidado), hasta la edad de vida probable del señor Costello Darío Cardona Colorado, atendiendo que la víctima para el año 2003 tenía 52 años, contaba con 29.9 años más de vida⁵⁵.

Se aplica la siguiente fórmula:

$$LCF: Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i (1 + i)^n}$$

Donde:

⁵⁴ Última reportada por el DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/feb23/IPC_Indices.xlsx

⁵⁵ Según Resolución No. 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia

n: Número de meses de la esperanza de vida de la víctima. Para el año 2003, el señor Cardona Colorado contaba con 52 años de edad y según la tabla de mortalidad de la Superintendencia Financiera, con una esperanza de vida de 29.9, es decir, 358,8 meses; menos los que ya se tuvieron en cuenta para el cálculo del LCC, que fueron 233, se tiene un total de: 125,8 meses

LCF: \$77.354.556

Así las cosas, el lucro cesante futuro a favor de la demandante Costello Darío Cardona Colorado, corresponde a la suma de **Setenta y Siete Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos M/L (\$77.354.556)**.

5.6 De la condena en concreto.

Por todo lo anterior, se revocará el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia respecto de la declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva de Omar de Jesús Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate y en su lugar se declarará la responsabilidad civil de los mencionados demandados frente a Luz Marina Parra Isaza y Leidy Daniela Cardona Parra.

Así mismo, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la cosa juzgada, únicamente respecto de las pretensiones formuladas por Costello Darío Cardona Colorado en contra de Omar de Jesús Alzate y Luz Marina Agudelo Alzate. En consecuencia, se declarará civilmente responsable al demandado Arturo Cárdenas Ordoñez por los perjuicios causados a Costello Darío Cardona Colorado y condenándolo al pago de los perjuicios antes liquidados.

Ante la prosperidad de la alzada propuesta por la demandante, se condenará en costas en esta instancia a la demandada. Fijando como agencias en derecho la suma equivalente a 2 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero y tercero de la sentencia de primera instancia proferida dentro del presente asunto y, en su lugar, **DECLARAR** civil, solidaria y extracontractualmente responsables a OMAR DE JESÚS ALZATE, LUZ MARINA AGUDELO ALZATE y ARTURO

CÁRDENAS ORDOÑEZ de los perjuicios causados a LUZ MARINA PARRA ISAZA y LEIDY DANIELA CARDONA PARRA y condenarlos a pagar las sumas liquidadas en el numeral CUARTO de la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: REFORMAR el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida dentro del presente asunto, el cual queda en los siguientes términos:

"DECLARAR oficiosamente la existencia de cosa juzgada respecto de las pretensiones del señor COSTELLO DARIO CARDONA COLORADO frente a los demandados OMAR DE JESUS ALZATE y LUZ MARINA AGUDELO ALZATE."

TERCERO: DECLARAR civil y extracontractualmente responsable al demandado ARTURO CÁRDENAS ORDOÑEZ de los perjuicios causados a COSTELLO DARÍO CARDONA COLORADO, con ocasión de las lesiones sufridas en el accidente ocurrido el día 6 de octubre de 2003.

CUARTO: CONDENAR al demandado ARTURO CÁRDENAS ORDOÑEZ, a pagar los siguientes conceptos en favor de COSTELLO DARÍO CARDONA COLORADO:

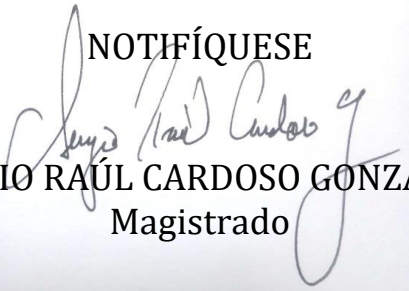
1. Por lucro cesante consolidado, actualizado a la fecha de esta sentencia en la suma: \$355'326.122.
2. Por lucro cesante futuro, en la suma de \$77'354.556.
3. Por daños morales la suma de equivalente a sesenta (60) SMLMV.
4. Por daño a la vida de relación la suma de equivalente a sesenta (60) SMLMV.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de primera instancia.

SEXTO: CONDENAR en costas en esta instancia, a la demandada. Fijar como agencias en derecho en esta instancia, la suma de 2 SMLMV.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
Magistrado

(Con salvamento parcial de voto)
JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Magistrado



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 05001 31 03 009 2017 00653 01

SALVAMENTO PARCIAL DEL VOTO

La existencia de la decisión penal condenatoria que hace tránsito a cosa juzgada en el proceso civil¹, me llevaría a acompañar la presente

¹ Sobre el punto la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia, ha indicado:

“La fuerza de cosa juzgada que se reconoce a ciertos pronunciamientos de los jueces penales en lo que concierne a la acción criminal, sobre el proceso civil indemnizatorio, no surge de la simple aplicación de los principios que gobiernan el instituto de la cosa juzgada en materia civil, pues las diferencias que ontológicamente caracterizan la actividad jurisdiccional en uno y otro proceso, determinadas fundamentalmente por el bien jurídicamente tutelado, descartan la coincidencia de los elementos procesales en los cuales subyace el instituto mencionado.

“El fundamento de tal autoridad, como lo precisa la doctrina ‘... reside en un motivo de orden público sumamente simple. Los tribunales represivos, cuando resuelven la acción pública, fallan dentro de un interés social; no juzgan entre dos partes determinadas, sino entre una parte y la sociedad entera. Lo que deciden para fallar sobre la acción pública debe, pues, imponerse a todos. Nadie puede ser llevado a discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses civiles. Por eso, la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil; se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil’ (Henri y León Mazeaud, André Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo Segundo, Volumen II, pág. 354).

“Mientras que la sentencia condenatoria penal comporta un valor absoluto de cosa juzgada, la absolutoria o liberatoria de la responsabilidad penal del procesado, en cuanto a sus efectos en el campo civil, estaba sujeta a la reglamentación establecida por el art. 57 del C. de P. Penal, (hoy ídem artículo de la ley 599 de 2000), el cual consagraba que la acción civil no puede iniciarse ni proseguirse, cuando en providencia que haya adquirido firmeza, el reo ha sido eximido de responsabilidad penal, bien porque el hecho investigado no existió, ora porque el sindicado no lo cometió, u obró en legítima defensa o en estricto cumplimiento de

decisión, pero no será así, al menos totalmente, tal como continuó exponiendo.

Discrepo en atribuirle a la parte demandada el ejercicio de actividad peligrosa, en razón a que el vehículo con el que se causó el daño estaba siendo reparado, por lo que una cosa es el objeto en sí, y otra que se esté realizando una actividad peligrosa.

Sobre el punto, el Código Nacional de Tránsito en su artículo 2º, define el accidente de tránsito, como: *“Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho”*. Subrayado intencional.

En esos términos, no se puede colegir el ejercicio de una actividad peligrosa de los demandados, pues si el vehículo con que se causó el daño estaba siendo reparado, es decir, no estaba en movimiento, esta mera circunstancia lo alejaba de la presunción de culpa, siendo pertinente recordar precedente jurisprudencial, que indicó:

“A la par, no debe confundirse la responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa, con la derivada de las cosas

un deber. De manera que al momento de decidir, dado el valor relativo que a la sentencia absolutoria le atribuye la ley, el juez civil debe verificar si el pronunciamiento del juez penal encaja en alguna de las hipótesis que taxativamente se consagran en dicho precepto, pues sólo en tales supuestos puede argüir su influjo sobre la acción civil (CSJ, SC del 12 de agosto de 2003, Rad. n.º 7346).” SC3062-2018 del 1º de Agosto de 2018.

riesgosas o peligrosas; “cosa” y “actividad” son diferentes, y en el supuesto que se analiza, dimana de “actividades” y no exclusivamente de “cosas riesgosas” o “peligrosas”, la cosa se utiliza en la actividad, puede ser inocua y la causa del daño se conecta o no a la cosa sino a su utilización en el ejercicio de una actividad peligrosa” ². Entre comillas dentro del texto.

Así, un vehículo automotor en estado de parqueo con todas las seguridades del caso, en circunstancias normales no se torna peligroso, el ejercicio de la actividad peligrosa surge cuando se pone en movimiento el rodante, o cuando se rueda al no estar debidamente asegurado.

En esos términos, si sucede un accidente v. gr. dentro de un bus, que se encuentra parqueado y fuera de servicio, como cuando una persona encargada de su limpieza se lesiona, para nada se puede predicar culpa presunta, por lo que en una situación como esta deberá probarse la misma para el éxito de la pretensión indemnizatoria.

La peligrosidad se predica cuando los vehículos están en movimiento y en ese tipo de actividad se genera el daño, donde en el asunto en estudio cuando sucedió el accidente, el rodante de los demandados estaba parqueado siendo objeto de labores de reparación, por lo que no se puede predicar que estos ejercieran actividad peligrosa, debiéndose haber abordado el concepto de culpa probada para la prosperidad o no del recurso en estudio.

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CASACIÓN CIVIL. 24 de Agosto de 2009. Exp. No. 11001-31-03-038-2001-01054-01

Es más, ¿quién tenía el control del rodante en el momento del accidente?, en este caso era la víctima directa (como mecánico), quien daba indicaciones al “conductor” del bus que estaba siendo reparado, de ahí que me aparte del factor de imputación que se realizara.

En esos términos, al existir en las presentes otros demandados (y demandantes) que no fueron parte ni participaron en el proceso penal del que se predica cosa juzgada de cara al presente, debió volverse a evaluar el elemento concausalidad, en la medida que el lesionado estaba debajo del bus, donde en una típica responsabilidad extracontractual, como es la presente, ello implicaba exposición imprudente al riesgo, tal como se deriva del artículo 2357, lo que de suyo debió variar la indemnización dispensada.

Con el mayor respeto, cordialmente:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Magistrado